

# Las cabezas del

# Narcotráfico

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA



El consumo de drogas, creciente en los Estados Unidos, es el verdadero origen del problema que hoy da tanto que hablar en nuestro país, y que nos ha puesto delante de los ojos, con empavorecedora claridad el poderío de la mafia que detenta sus ganancias. Ciertamente, en México tenemos responsabilidad de evitar la producción y el tránsito de estupefacientes, pero si no se limita el apetito por las drogas, éste buscará satisfacerse de cualquier manera.

En abril del año pasado murió asesinado por la mafia del narcotráfico el procurador de justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. El de las drogas, le había dicho a un periodista (Ted Córdova Claire, corresponsal de Proceso), "más de que represión

es un asunto de oferta y demanda". Y como este mismo reportero apunta: "La represión, hasta ahora, se ha concentrado en los países donde se origina la droga, y en la parte sudamericana de la ruta de la droga, pero no hay todavía una acción espectacular contra los contactos y las mafias que operan dentro de Estados Unidos". (El subrayado es nuestro).

Naturalmente, una porción de ese problema es nuestro. Y las acusaciones de que la corrupción complica combatir aquí al narcotráfico parecen tener asidero. De suerte que si bien no hemos de cargar con toda la responsabilidad, porque el tema nos es esencialmente ajeno, tampoco hemos de envolvernos en la bandera de la patriotería y negar que nuestras deficiencias contribuyen a agravar la cuestión. Revisar algunos datos recientes ayuda a conocer la dimensión de esos dos extremos de la cosa.

El cinco de noviembre pasado, el subdirector de la Policía Judicial Federal, don Rafael Rocha Cordero, y el comandante Miguel Aldana (que era entonces el enlace con la Interpol, de donde fue removido después, presentaron a nueve personas detenidas días atrás en posesión de un cargamento espectacular: 298 kilogramos de cocaína que a un precio máximo de cuarenta y cinco mil dólares el kilo hubiera producido una venta por trece y medio millones de dólares, es decir casi tres mil millones de pesos. El cargamento había llegado en avión desde Colombia, hasta una pista ubicada en las cercanías de Ciudad Guzmán, Jalisco. Allí, a bordo de un camión especialmente fletado y protegido, la cocaína inició un viaje que la llevó por Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sin que la diversidad de revisiones aduanales pusiera al descubierto su naturaleza. Fue hasta que se aproximaba a Nuevo Laredo, de donde debería llegar a Miami, que la judicial federal cayó sobre los transportistas y su valiosa carga. Lo hicieron, según anunciaron los jefes policiacos encargados de la conferencia de prensa del cinco de noviembre, gracias a un informe confidencial.

Hemos logrado saber que ese informe fue aportado por Enrique Camarena Salazar, el agente norteamericano ahora desaparecido, que recién entonces volvía a Guadalajara de un inopinado viaje que duró tres meses, precisamente a Colombia. Al parecer, sin embargo, los principales personajes del episodio no resultaron afectados, sino sólo quienes llevaban la droga, como tamemes de lujo, pues por colocarla del otro lado de la frontera hubieran recibido cuatrocientos cincuenta mil dólares.

Dos días después la policía y el ejército dieron otro descomunal golpe al

narcotráfico. En varios campamentos en Chihuahua decomisaron marihuana que pesaba diez mil toneladas. También, según se ha sabido después, informes confidenciales permitieron a las fuerzas mexicanas de la ley localizar los enormes almacenes y los plantíos que fueron entonces destruidos. Se ha manejado la especie, incluso, de que en algunas oficinas mexicanas fueron presentados por funcionarios norteamericanos planos fotogramétricos tomados desde satélites, donde se aprecia con exactitud la ubicación de los cultivos y señales inequívocas de la protección en apariencia oficial que recibían. Entonces la Procuraduría General y la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar de los hechos. Pero como ocurrió en el caso de la cocaína, sólo detuvieron a personas de segunda importancia. El principal responsable de la colosal operación delictuosa, el conocido Rafael Caro Quintero, pudo huir.

No fue lejos. Se marchó a Guadalajara, donde ha establecido su base de operaciones. Unos días más tarde, la policía conoció por fin su paradero. El 24 de noviembre estaba en el restaurante de su propiedad llamado La Langosta Loca. Pero, al parecer avisado de nuevo, se preparó para recibir a sus presuntos captores y no sólo evitó ser detenido sino que, conforme a la versión publicada por *La Jornada*, mató a dos agentes judiciales, Felipe Sánchez y Gabriel Godoy. Según este mismo diario, Caro Quintero habría quedado herido. Si en verdad fue así, sanó pronto de sus males, porque el sábado 23 de febrero se dio el lujo de volar, para asistir a la boda de una su hermana, de Guadalajara a Caborca, donde también tiene intereses (lo que ha hecho pensar que está vinculado al asesinato, todavía, sin resolver, del líder local Rafael Muñoz, y de dos de sus compañeros, ocurrido el año pasado). Salió en un avión particular, en plenas narices de agentes mexicanos y norteamericanos que lo creyeron un colega, puesto que portaba credenciales (ora se dice que de la Federal de Seguridad, ora que de la judicial del Estado).

El día del tiroteo en su restaurante, según la nota de *La Jornada*, la policía arrestó a 21 sospechosos. Entre los nombres que se citan en la información periodística destacan los de Miguel Gallardo y Arturo Izquierdo. Todos ellos obtuvieron un amparo y salieron poco después en libertad, lo cual ha escandalizado a las autoridades norteamericanas. Acaso tengan razón para escandalizarse en ese punto particular, si como es suposible, el primero de los citados es Miguel Félix Gallardo, buscado activamente por su participación en la concentración de marihuana en Chihuahua. El segundo nombre es por lo menos homónimo del personaje veracruzano que a sí mismo se declaró inocente del asesinato del líder cañero Roque Spinoso Foglia, en vista que se le ha citado entre los posibles homicidas. Según informes de la Dirección de Narcóticos de los Estados Unidos, Gallardo tiene, más que un cómplice, un empleado fiel en Jaime Torres Espinosa, que es coordinador general del circuito norte de la Procuraduría General de la República. La misma información periodística donde se incluye ese dato asegura que Torres Espinosa compró en San Diego una mansión por la cual dio de enganche cerca de cincuenta mil dólares.

No habrá combate eficaz al narcotráfico mientras en los Estados Unidos no se realicen acciones de fondo, policiacas y de otro género, para enfrentarlo. El colmo es que exista una revista denominada *High Times*, una especie de *Playboy* de los narcómanos, descrita por Córdova Claire como "dedicada al público consumidor de drogas de altos ingresos y que es un medio legal bien respaldado por publicidad de negocios afines al consumo de drogas igualmente legales". Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra propia tarea que consiste en apresar, no en dejar libres a los acusados de participar en el secuestro de Camarena, o en el negocio de las drogas en general, como se ha hecho con el agente Tomás Morlett, que tiene la desfachatez de declarar que se dedica a escribir sus memorias.